



Transiciones

VÍCTOR ALEJANDRO ESPINOZA

victorae@colef.mx

Falta de seguridad

Fueron las razones que adujo la presidenta de la mesa directiva de la XIX Legislatura, la diputada Gloria María Loza Galván, para explicar la ausencia del gobernador, Eugenio Elorduy Walther, en el recinto parlamentario este 1 de octubre. Fue un hecho inédito en la historia política local. El gobernador no pudo entregar personalmente su sexto y último informe, y obviamente que no lo pudo leer. La paradoja es que el talón de Aquiles de su administración: la inseguridad, sea la causa de su ausencia.

Nuestra cultura política no admite matices; es de blanco o negro, o si se prefiere, azul o rojo. Por eso no me sorprende que cuando ocurren hechos como el referido inmediatamente se pregunte: ¿Para ti está bien o mal lo que sucedió? Pero también explica que los comentarios impliquen la alusión a la vergüenza por los sucesos o a lo que pensarán de nosotros en otras latitudes. Calificamos pero no explicamos. Nos desgarramos las vestiduras ante cada evento; el entendimiento no está en el horizonte de nuestra forma de observar los fenómenos sociales, económicos o políticos. Es una cultura de buenos y malos, donde generalmente nosotros hacemos parte de los primeros.

Lo que aconteció este 1 de octubre es fiel reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional. No contamos con las instituciones que permitan distender los conflictos;

la transición política no incluyó un nuevo diseño institucional. En gran parte porque tanto el PAN como el PRI siempre compartieron el mismo diagnóstico: las instituciones no fallaron, lo hicieron los políticos que las dirigían. De ahí que la operación fuera cambiar de partido en el poder, nunca construir una nueva institucionalidad.

Dice el sociólogo español Manuel Alcántara que los países en vías de consolidación democrática se encuentran permanentemente al borde de una crisis de gobernabilidad; así le pasa a México y sus entidades no permanecen al margen de ello. Urgen reformas profundas a nuestro sistema político para completar nuestra transición. Para ello se requieren acuerdos entre los actores políticos.

El sexenio que concluye no sólo muestra un déficit en el terreno de la seguridad pública. Se caracterizó por la ausencia de operación política. No sólo se trató de una falta de liderazgo político del Ejecutivo, sino de cuadros subalternos que suplieran esa carencia. Lo mismo le sucedió a la bancada panista en el Congreso. El escándalo del 1 de octubre pudo haberse evitado; y no me refiero como algunos lo quieren a través del uso de la fuerza, sino por medio de la negociación. Mi compañero del programa de televisión Lupa Ciudadana, Rodrigo Martínez Sandoval, considera que una salida hubiera sido la réplica de lo que hizo Marcelo Ebrard en el DF, es decir, escuchar y debatir con

los diputados el día del informe. La otra posibilidad era negociar la entrega del informe como se hizo con Felipe Calderón; que el gobernador asistiera al Congreso y entregara el documento y no a través de un "propio", como finalmente aconteció.

Muchos pensaban que dada la trayectoria de Eugenio Elorduy, miembro de esa generación de panistas heroicos curtidos en la oposición en tiempos adversos, sería un gobernador con desarrolladas aptitudes para entender los conflictos y negociar con sus adversarios. No fue así, quedó muy lejos de otros panistas que le precedieron en el cargo, visiblemente Ernesto Rufo Appel y Héctor Terán Terán. Por el contrario, gobernó con mano dura frente a quienes consideró sus enemigos. Sus operadores brillaron por su ausencia; al final el círculo cercano se fue depurando y sólo concluyeron los jóvenes, con escasa trayectoria para intentar un estilo de gobierno más abierto y plural y, sobre todo, conciliador.

Hoy el conflicto entre el gobierno del estado y el priismo se explica en parte por una normatividad electoral rebasada y de urgente cirugía mayor, por la desesperación de la Alianza para Que Vivas Mejor, pero también por el estilo personal de gobernar caracterizado por la mala decisión de participar activamente en la política electoral de la entidad.

El autor es investigador del Colegio de la Frontera Norte.